

María Fernanda Cabal Molina
Fundación Colombia Ganadera
Miembro fundador

Desde su nacimiento, en 2006, y hasta hace pocos meses, hice mío el proyecto de la Fundación Colombia Ganadera, Fundagán, y como presidente de su Junta Directiva, estuve atenta a todos sus programas en favor de los ganaderos colombianos, sobre todo los que apoyan al pequeño productor con iniciativas tan hermosas y de tanto impacto social como “Una vaca por la paz”, o el que busca apoyar a Fedegán en el programa “Alimentando la esperanza”, desarrollado con recursos del Fondo Nacional del Ganado para fomentar el consumo de carne y leche entre los sectores más desprotegidos de la población. No obstante, sin menoscabo de los anteriores, los más cercanos a mis convicciones y a mi historia de vida son, definitivamente, los que han asumido la defensa de los Derechos Humanos de los ganaderos víctimas de la violencia, con la creación del Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, y su programa de Acompañamiento a las víctimas ganaderas de la violencia.

Así pues, no oculto mi particular interés por este último, porque frente a lo que representa un verdadero genocidio contra el gremio ganadero colombiano, tanto los ganaderos mismos, subyugados todavía por el terror, como las autoridades y la sociedad toda, parecen haber guardado conveniente silencio, más que explicable en las víctimas, pero totalmente injustificado por parte del Estado y la sociedad. Hoy el tema está sobre el tapete, porque una de los primeros resultados de la mesa de negociaciones de La Habana, aún antes de firmar cualquier cosa –si es que se firma cualquier cosa– fue la devolución de la personería jurídica a la UP, que inicia su resurgir en la política volviendo a utilizar a sus víctimas como bandera para ganar votos y atacar a sus adversarios.

Al margen del número de víctimas, sobre el cual hay tantas versiones como discursos políticos; y al margen de quiénes fueron sus victimarios, sobre lo cual hay también diferentes versiones, que incluyen hasta a las mismas Farc; lo que quiero resaltar es la magnificación que el país ha hecho de unas víctimas a partir de su utilización política, frente al literal anonimato de otras, entre ellas las víctimas ganaderas de la violencia. Es la estratificación de las víctimas, entre las que se agitan en los medios –las de primera– y las que quedan confinadas a su propio sufrimiento o al discreto espacio del dolor de sus deudos.

La victimización de cualquier ser humano, de cualquier colombiano nos merece respeto, pero no hay víctimas de primera ni de segunda, y el derecho a la verdad, al reconocimiento y a su testimonio visible esa igual para todas ellas. Por eso nos propusimos desde un comienzo a “acabar con el silencio, para así poder acabar con el olvido” de las víctimas ganaderas de la violencia; porque las víctimas ganaderas no son menos víctimas.

Hace algunos meses, por intermedio de la Unidad de Atención y Reparación Integral a las Víctimas, los colombianos tuvimos una aproximación al fatídico legado de nuestra violencia armada: más de cinco millones de compatriotas -una cifra cercana al 11% de la población nacional- se reconoce como víctima del flagelo de la violencia. Así pues, somos una sociedad históricamente abatida por el dolor y la desolación generados por la actividad criminal de diferentes orígenes, que ha dejado profundas heridas sin distinguir alguno. Cincuenta años de asesinatos, secuestros, desplazamientos, masacres y terrorismo; y a pesar del tiempo transcurrido, parece que el país no ha podido responder a la pregunta: ¿Cómo inició esta violencia entre hermanos?

Existen varias aproximaciones. Las más deterministas recurren al argumento fácil de la naturaleza violenta de los colombianos, mientras algunas ubican el origen de la actual violencia en la confrontación partidista de los años cincuenta. No obstante, la mayoría coincide en el papel determinante del comunismo internacional en el marco de la Guerra Fría, a partir de la estrategia de la exportación a Latinoamérica de la subversión armada, que en nuestro país derivó en el nacimiento de los diversos grupos guerrilleros. Esta primera violencia generaría luego una reacción paramilitar ilegal y desahogada, y ambas terminarían nutriéndose de los recursos del narcotráfico, que marcaron el proceder criminal de las mafias de los años ochenta y su guerra contra el Estado, y aún hoy continúan encendiendo la hoguera de la violencia.

Si bien es cierto que existen varias respuestas con valor explicativo, no debemos perder de vista que se trata de una violencia multicausal y multiforme, que tiene in-tensidades, matices y actores que varían en las

diferentes regiones del país, de acuerdo con los diferentes contextos o climas locales y regionales en que surgió y se fue alimentando. Este es un planteamiento que, sin duda, no se puede tomar a la ligera, ya que si lo que hoy somos se encuentra mediado por nuestras vicisitudes pasadas y por nuestros entornos regionales de mayor o menor pobreza, de mayor o menor abandono y ausencia del Estado, debemos reconocer aquellas complejidades de nuestra historia y de nuestra realidad regional, sin olvidar nunca que, como telón de fondo, detrás del delito siempre aparece una cultura proclive al desconocimiento de la Ley, y un Estado que no ha sido eficiente en garantizar su cumplimiento ni en castigar a quienes se apartan de ella. La impunidad es el gran aliento para el delito y la violencia. Surge un segundo interrogante: ¿Quién ha de consignar esta historia patria de violencia? En este sentido, el ejemplo internacional ha señalado que las comisiones de la verdad con poder jurídico son una atinada estrategia para dar cuenta de las fracturas nacionales durante los periodos de violencia, ya que su finalidad es aquella de recopilar la mayor cantidad de información proveniente de la sociedad quebrantada.

Durante los últimos 39 años, este estilo de comisiones ha sido ampliamente adoptado en todo el mundo; más de 30 han sido establecidas en diferentes países como Sudáfrica, Uganda, Liberia, Nigeria y Sierra Leona, Sri Lanka, Nepal, Haití, Argentina, Chile, e incluso Canadá, solo por nombrar algunos.

En Colombia hemos intentado formular iniciativas similares en los últimos veinte años, pero, por el contrario, se ha permitido que diferentes intereses políticos escriban la historia nacional según la agenda del día, lo cual tiene el efecto perverso, como ya mencioné atrás, de “estratificar” a las víctimas, cuando no de visibilizar solamente a unas y ocultar totalmente a las otras. En muchos casos, estos ejercicios han producido informes sin fundamentos, parciales o limitados, que a su vez han servido como herramientas políticas que producen resultados políticos en tiempos políticamente definidos. Mientras tanto, las víctimas aguardan a que se les reconozca como parte de la historia nacional, a que el peso de la justicia recaiga sobre sus victimarios y a que sean reparados. Olvidadas, con cierta frecuencia se les plantea la necesidad de “pasar la página” y desconocer su dolor para así reconstruir una nueva vida. Por ello, consideramos que la integralidad y la objetividad de esa construcción histórica exigen que ella sea el fruto de un ejercicio democrático, en el que todos los sectores dolientes enriquezcan el significado de nuestra problemática social desde su experiencia. Ese es el sentido de contribución de este nuevo esfuerzo de la Fundación Colombia Ganadera, Fundagán, para aportar a la comunidad ganadera y a la sociedad en general, nuevos elementos que permitan hacer visibles a las víctimas ganaderas de la violencia, como un primer paso para la reivindicación de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Frente a esta necesidad de recuperar la voz de las víctimas y denunciar el dolor de sus heridas aún abiertas, en el año 2009 creamos el Observatorio de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, con el único objetivo de recuperar la memoria de la victimización del gremio ganadero durante la violencia de todos los pelambres que ha sufrido el campo colombiano. Como parte de este compromiso fundacional, ese mismo año publicamos el primer informe Acabar con el Olvido, que luego de un juicioso y extenso trabajo de investigación, dio a conocer al país y a la comunidad internacional, los casos de más de 3.000 víctimas ganaderas de la violencia.

El 29 de septiembre de 2011, Fundagán emprendió una nueva etapa: el acompañamiento a las víctimas ganaderas para trabajar en el reconocimiento de sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, en el marco de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras (Ley 1448 de 2011). A través de su equipo jurídico y su infraestructura, al Programa de Acompañamiento a las Víctimas Ganaderas de la Violencia –PAVIC–, se han acercado a brindar su información básica cerca de 7.000 ganaderos más que se reconocen como víctimas y tienen expectativas frente al reconocimiento de sus derechos en el marco de la ley.

Hoy, con la entrega del segundo informe Acabar con el Olvido, marcamos dos años de trabajo del Programa de Acompañamiento a las Víctimas Ganaderas de la Violencia, y cuatro de reconstrucción de la Memoria Histórica de las víctimas en Colombia. El documento que tiene en sus manos, es el resultado de una ardua labor de acompañamiento, que ha permitido recoger miles de voces de las víctimas ganaderas que se han aproximado a nuestros funcionarios, a fin de reivindicar sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación en las instancias que correspondan. Es un testimonio de dolor y de denuncia; es un grito para nunca olvidar esta otra cara de la historia nacional.

El libro está dividido en 15 capítulos, correspondientes a diferentes regiones de nuestro país. Metodológicamente, estas regiones fueron definidas bajo un criterio diferencial relacionado con las experiencias locales asociadas a la violencia armada, de acuerdo a patrones de criminalidad y a los ejes geográficos y político-administrativos. Cada uno de los capítulos, a su vez, incluye tres secciones. La primera de ellas esboza, por medio de una breve semblanza, cuáles han sido los principales actores, eventualidades y escenarios de la violencia armada en la región correspondiente. La segunda recupera algunas de las crónicas que nuestro equipo investigativo ha recolectado en estos años, con el fin de comprender las dinámicas regionales desde la vivencia de los ganaderos. La tercera y última presenta los testimonios de más de 1.900 víctimas que nos han ampliado información y muchas de ellas hacen parte ya de nuestro programa acompañamiento. Adicionalmente, el informe cuenta con un CD-ROM adjunto, en el que se incluyen más de 6.000 nombres de ganaderos que se han aproximado a nuestro programa reportándose como víctimas, con la expectativa de solicitar asesoría jurídica o acompañamiento en el reclamo de sus derechos. El CD incluye, adicionalmente, una versión digital de nuestro primer informe.

La Fundación Colombia Ganadera sigue comprometida con las víctimas ganaderas de Colombia. A través de sus informes ha recuperado testimonios de miles de colombianos, como un aporte hacia una verdadera paz. Tristemente, siempre supimos que este puede ser un ejercicio continuo y tal vez de nunca acabar, por lo que el compromiso es continuar en el ejercicio de construcción de una memoria histórica justa e inclusiva. Por ello, invito nuevamente a todos los ganaderos interesados para que sean parte de este proyecto, denuncien y hagan efectivo sus derechos. Fundagán reitera que, en nombre del gremio ganadero, mantendrá viva la memoria de sus víctimas, no solo para honrarla, sino para reivindicar sus derechos individuales y los derechos colectivos de la ganadería colombiana.

Como mencioné inicialmente, hace pocos meses me marginé de la Fundación y de sus programas, pero nunca los he sacado de mi corazón y de mis convicciones. Por ello agradezco la oportunidad de presentar este Segundo Informe de Acabar con el Olvido a los ganaderos de Colombia y a todo el país, pero no podría concluir estas líneas sin hacer un reconocimiento quienes se echaron a hombros tan formidable tarea que hoy mostramos con orgullo.

Al grupo de Fundagán responsable del Observatorio de DD. HH. Y DIH, y del Programa de Acompañamiento a las Víctimas Ganaderas de la Violencia, PA-VIC, liderado por Alejandro Ponce de León, con el apoyo de Orlando Jaimes, María Esperanza Ruíz, Diego González y Nery Castro. A la colaboración muy especial de Rodolfo Montoya y los funcionarios regionales de Fedegán en todo el país, así como a los gremios ganaderos regionales. Al apoyo de la Junta Directiva de Fundagán de Nataly Delgado como Directora Ejecutiva de la Fundación; y a la asesoría voluntaria de Guillermo Naar, Roberto Bruce y Ricardo Cortés. Y por supuesto, a la Junta Directiva de Fedegán, a su Presidente Ejecutivo, José Félix Lafaurie, al Secretario General, Jaime Daza y a su grupo de funcionarios, por el apoyo de la Federación a la edición del libro. Un esfuerzo de muchos para un resultado que enaltece a Fedegán como entidad gremial al servicio de los ganaderos colombianos, y a Fundagán

como expresión de la responsabilidad social del gremio ganadero, en su compromiso con el porvenir del campo colombiano.